

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**
Radicación: **2023-00263**

Surtido el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 se procede a decidir sobre la acción de tutela instaurada por **ANDRES STEVEN MEDINA HERNANDEZ** en contra de la **EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL** en orden a proteger sus derechos fundamentales.

ANTECEDENTES

El accionante sustenta sus pretensiones en los hechos que se resumen a continuación:

Señala que el 20 de enero de 2023 formuló un derecho de petición ante la entidad accionada en la que requería que le hiciera entrega de las evidencias que demostraran la veracidad de una de las afirmaciones realizadas y que le sirvieron de fundamento para la evaluación de desempeño realizada por su jefe inmediato.

En dicha solicitud se requirió a la accionada para le hiciera entrega de las evidencias que demostraran la siguiente afirmación: *“se evidenció desautorización del jefe inmediato al ir donde el jefe de departamento de producción a pedirle analizara si el (Andrés Medina) era la persona indicada para prestar el apoyo a la coordinación de producción, condición que por la experiencia y conocimientos de Andrés es idóneo para soportar la coordinación de producción, lo cual se le manifestado (sic) el día 29 de octubre de 2021 telefónicamente”*.

El derecho de petición tiene como objetivo que por parte de la entidad accionada se envíen las pruebas que validaran si el accionante buscó de alguna forma la jefe de departamento de producción para pedirle analizara la situación relatada en la afirmación precedente y que sirvió como fundamento para la evaluación de desempeño.

PETICIONES

ORDENAR dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado a ECOPETROL y en consecuencia se ordene dar entrega de lo mencionado en el numeral 2 y 3 del acápite de pruebas

ACTUACIÓN PROCESAL

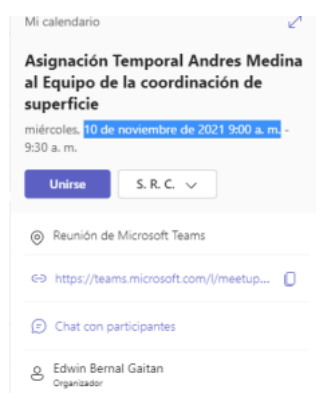
Mediante auto fechado del 28 de abril de dos mil veintitrés (2023), se admitió la acción de tutela en contra **la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL** solicitando a la entidad contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

ECOPETROL: Señalaron en resumen que se oponen a la presente acción constitucional indicando que: *“... la sociedad que represento emitió una respuesta de fondo frente*

a la solicitud elevada por la aquí accionante, sin que la respuesta tenga que ser positiva para el mencionado señor"...

Señalaron que la entidad dio respuesta al peticionario en los siguientes términos:

"Para el 29 de octubre del 2021, en calidad de jefe inmediato di la indicación a Andres Medina de prestar apoyo a la Coordinación de Producción, se tenía conocimiento tanto de Andres Medina como de la Coordinacion de la proximidad en la salida a vacaciones y en esa misma conversación se le indico de la necesidad de urgencia de prestar el apoyo durante las siguientes dos semanas, las cuales antecedían su salida a vacaciones programadas a partir del 22 de noviembre del 2021 y de la capacitación programada del 15 al 18 de noviembre del 2021, sin embargo la actitud y conducta de Andres Medina frente a esta indicación fue dilatoria teniendo en cuenta que se acercaba su periodo de ausencia, al punto de que el Jefe del Departamento de Producción, el Ing Edwin Bernal se vio en la imperiosa necesidad de convocar a una reunión urgente para el día 10 de noviembre del 2021 pasados 12 días de habersele indicado prestar el apoyo, como se evidencia a continuación:



Si se hubiera acatado la indicación como jefe inmediato, se hubiera prestado el apoyo oportuno a la Coordinación de Producción desde el 02 de noviembre del 2021, situación que no se dio, mostrando claramente con esta actitud comportamientos con oportunidades de mejora en las competencias organizacionales por parte de Andres Medina.

Es de enfatizar que la gestión del desempeño individual responde al ejercicio de la facultad de dirección, gestión y administración que le corresponde a Ecopetrol S.A. en su calidad de empleador, y que tiene como propósito asegurar el logro de los objetivos, competencias y retos organizacionales de sus colaboradores; contexto dentro del cual se establecen modelos, procesos y normativas para gestionar el desempeño del personal con el fin de asegurar la alineación de objetivos individuales con los organizacionales; (...)"

En ese orden de ideas, se da una respuesta clara y contundente a la solicitud elevada por el señor ANDRES STEVEN MEDINA, sin que dicha respuesta sea entendida fuera de manera parcial como mal lo indica en su escrito de tutela.

Señala en su escrito de tutela, que la empresa omite la entrega de documentos, testimonios etc, HECHO QUE NO FUE SOLICITADO EN EL DERECHO DE PETICIÓN, pues este se refirió a evidencias y así la Empresa dio respuesta poniendo de presente la misma.

CONSIDERACIONES:

La acción de tutela es un mecanismo de amparo judicial que permite a las personas exigir ante cualquier Juez de la República, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando se presente una violación o amenaza de violación por actos, hechos, omisiones u operaciones de cualquier autoridad pública, o por la acción u omisión de particulares bajo ciertas y determinadas circunstancias que define la Ley.

Dado que en este proceso se reclama la contestación del derecho de petición, el Despacho estima pertinente advertir sobre la protección el derecho fundamental de petición, que ésta comprende los siguientes elementos de acuerdo con lo expuesto por el máximo tribunal constitucional en sentencia T – 667 de 2011, los cuales se exponen a continuación:

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en las normas correspondientes.

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que obliga a la autoridad a quien se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guarden relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado.

(4) Y, el derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta”.

Asimismo, el máximo tribunal constitucional en sentencia T-997 de 2005 adoctrinó respecto de la carga de la prueba en lo concierne a la radicación del derecho de petición y contestación del mismo, como se pasa a exponer:

“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su fecha traslada a la entidad demandada **la carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente.** Pero si ante el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de responder”..*(Negrilla y subrayado fuera del texto)*

Con el anterior panorama jurisprudencial se procede a descender al caso objeto de estudio.

Delanteramente, debe señalarse que este Despacho amparará la garantía fundamental de petición en favor del extremo accionante, por lo que se pasa a exponer.

En primer lugar, debe señalarse que, en efecto, la entidad accionada dio respuesta al derecho de petición del señor ANDRES STEVEN MEDINA HERNANDEZ, sin embargo, se observa que, en la solicitud, el aquí accionante expresamente solicita se le remitan *“...la evidencia que valide la afirmación realizada previamente por usted”.*

En segundo lugar, en la respuesta al derecho de petición que fuere aportada por el accionante y la entidad accionada, se encuentra que si bien es cierto da explicaciones de lo ocurrido el 29 de octubre de 2021, nada se dice de las evidencias que soportaron la afirmación transcrita por el accionante, esto es: *“se evidenció desautorización del jefe inmediato al ir donde el jefe de departamento de producción a pedirle analizara si el (Andrés Medina) era la persona indicada para prestar el apoyo a la coordinación de producción, condición que por la experiencia y conocimientos de Andrés es idóneo para soportar la coordinación de producción, lo cual se le manifestado (sic) el día 29 de octubre de 2021 telefónicamente”.*

Recordemos que, respecto al derecho de petición Al respecto en sentencia T 464 del 21 de junio de 2012, la Honorable Corte Constitucional Magistrado Ponente doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO, expediente 3394627 dijo:

"La Constitución Política en su artículo 23 señala que "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

La jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en señalar el alcance de este derecho, indicando que la respuesta a este tipo de solicitudes debe contener los siguientes lineamientos: (i) pronta y oportuna, (ii) resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente con la situación planteada por el interesado, (iii) y ser puesta en conocimiento del peticionario. Al no cumplirse con estos presupuestos, se estaría vulnerando el mismo¹. Al respecto, la sentencia T-377 de 2000, expuso:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(...)

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

(...)

Por lo tanto, para satisfacer el derecho de petición, es importante que el interesado obtenga una respuesta pronta, de fondo, clara y precisa, dentro de

¹ Sentencia T 661 de 2010

un tiempo razonable que le permita, igualmente, ejercer los medios ordinarios de defensa judicial cuando no está de acuerdo con lo resuelto²."

Norma constitucional que desarrollan el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el sentido de que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, a obtener pronta resolución, **completa y de fondo sobre la misma**; así mismo indica que toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en la constitución Política de Colombia artículo 23, sin que sea necesario invocarlo.

Es insoslayable que respeto por cada uno de los elementos que hacen parte de la esencia del derecho fundamental de petición, permite garantizar que las solicitudes respetuosas formuladas ante las autoridades serán prontamente resueltas, - favorable o desfavorablemente-, **atendiendo de manera precisa y concreta la petición**. Por tanto, se satisface este derecho, cuando se emiten respuestas que resuelvan en forma sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar el sentido de la misma; y se comuniquen al interesado.

Así, la falta de una respuesta oportuna, por ausencia de una completa y de mérito o por la falta de notificación efectiva, se entiende vulnerado el derecho de petición, en orden a lo cual procede el amparo Superior para disponer que se produzca la decisión que desate desde todos sus ángulos la solicitud demandada.

En el presente caso, se encuentra que, en efecto, la entidad accionada no dio una respuesta clara y de fondo, al no indicar expresamente si existen o no tales evidencias y si en efecto las hay remitirlas al peticionario

En consecuencia, se ordenará a **ECOPETROL** que en el término de 48 horas contados desde la notificación de este proveído proceda a dar contestación de **FONDO** a la petición incoada por el accionante **ANDRÉS STEVEN MEDINA HERNANDEZ**, indicando expresamente si existen o no tales evidencias y si en efecto las hay remitirlas al peticionario.

Finalmente, se ordenará notificar la presente decisión por el medio más expedito a las partes intervinientes en la acción tutelar de la referencia.

EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D. C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR para garantizar el derecho fundamental de petición en favor de la parte accionante señor **ANDRÉS STEVEN MEDINA HERNANDEZ**, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a **ECOPETROL** que en el término de 48 horas contados desde la notificación de este proveído proceda a dar contestación de **FONDO** a la petición incoada por el accionante **ANDRÉS STEVEN MEDINA HERNANDEZ**, indicando expresamente si existen o no tales evidencias y si en efecto las hay remitirlas al peticionario.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes (accionante, accionada y vinculadas), por el medio más expedito, remitiéndose copia de este fallo.

CUARTO: REMÍTASE a la H. CORTE CONSTITUCIONAL para su eventual revisión la presente

² Ídem

acción de tutela en el evento de que no sea impugnada. Secretaría dejará las constancias del caso.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes.

CÉSAR ENRIQUE OSORIO ORTÍZ
JUEZ